



REPÚBLICA ARGENTINA

# DIARIO DE SESIONES

## CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**7ª REUNIÓN – 2ª SESIÓN ORDINARIA**

**31 DE MAYO DE 2017**

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada  
**MARTA GABRIELA MICHETTI**,  
y del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
senador don **FEDERICO PINEDO**

Secretarios:

Señor don **JUAN PEDRO TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**  
y señor don **ÁNGEL TORRES**



## PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel  
 AGUILAR, Eduardo Alberto  
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia  
 ALMIRÓN, Ana Claudia  
 BARRIONUEVO, Walter Basilio  
 BASUALDO, Roberto Gustavo  
 BLAS, Inés Imelda  
 BOYADJIAN, Miriam Ruth  
 CABRAL ARRECHEA, Salvador  
 CASERIO, Carlos  
 CASTILLO, Oscar Aníbal  
 CATALÁN MAGNI, Julio César  
 COBOS, Julio César Cleto  
 CREXELL, Lucila  
 DE ANGELI, Alfredo  
 DURANGO, Norma  
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz  
 FELLNER, Liliana Beatriz  
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel  
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle  
 FUENTES, Marcelo Jorge  
 GARCÍA, Virginia María  
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela  
 GIACOPPO, Silvia del Rosario  
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela  
 GODOY, Ruperto Eduardo  
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita  
 GONZÁLEZ, Nancy Susana  
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel  
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel  
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle  
 KUNATH, Sigrid Elisabeth  
 LABADO, María Esther  
 LEGUIZAMÓN, María Laura  
 LINARES, Jaime  
 LOVERA, Daniel  
 LUENZO, Alfredo

LUNA, Mirtha María Teresita  
 MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo  
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix  
 MAYANS, José Miguel Ángel  
 MERA, Enrique Dalmacio  
 MIRKIN, Beatriz  
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor  
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita  
 ODARDA, María Magdalena  
 PAIS, Juan M.  
 PÉRSICO, Daniel Raúl  
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos  
 PICHETTO, Miguel Ángel  
 PILATTI VERGARA, María Inés  
 PINEDO, Federico  
 REUTEMANN, Carlos Alberto  
 RIOFRÍO, Marina Raquel  
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura  
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo  
 ROZAS, Ángel  
 SACNUN, María de los Ángeles  
 URTUBEY, Rodolfo Julio  
 VARELA, Marta Lucía  
 VERASAY, Pamela Fernanda  
 ZAMORA, Gerardo

## AUSENTES, CON AVISO:

ALPEROVICH, José Jorge  
 BRAILLARD POCARD, Néstor  
 ESPÍNOLA, Carlos Mauricio  
 MARINO, Juan Carlos  
 MENEM, Carlos Saúl  
 OJEDA, José Antonio  
 PEREYRA, Guillermo Juan  
 PEROTTI, Omar  
 ROMERO, Juan Carlos  
 SOLANAS, Fernando Ezequiel

## SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág 18.)
2. **Entonación del Himno Nacional Argentino.** (Pág 19.)
3. **Homenaje.** (Pág 19)
4. **Aprobación de versiones taquigráficas.** (Pág 19.)
5. **Asuntos entrados.** (Pág 20.)
6. **Refrendo de decretos de la Presidencia.** (Pág 20.)
7. **Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.** (Pág 20.)
8. **Plan de labor.** (Pág 20.)
9. **Tratamiento sobre tablas de proyectos de ley.** (Pág 21.)
10. **Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.** (C.D.-81/16.) (Pág 23.)
11. **Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio.** (S.-206/16.) (Pág 34.)
12. **Incorporación del artículo 700 bis al Código Civil y Comercial de la Nación.** (S.-3.685/15.) (Pág 37.)
13. **Creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.** (C.D.-8/17.) (Pág 38.)
14. **Régimen de reparación a las víctimas de del delito de trata de personas.** (O.D. N° 156/17.) (Pág 40.)
15. **Declaración de zona de desastre y emergencia en diversas localidades.** (S.-1.465/17, S.-2.015/17, S.-2.016/17, S.-1.673/17 y S.-1.997/17.) (Pág 42.)
16. **Manifestaciones.** (Pág 44.)
17. **Redeterminación de los precios de contratos de obra pública destinados a vivienda.** (O.D. N° 133/17.) (Pág 44.)

Declaración de interés por la celebración de la Fiesta de la Vendimia. (S.-702/17.)

Homenaje al doctor René G. Favaloro, con motivo de un nuevo aniversario del desarrollo técnico del bypass. (S.-1.023/17, 1.626/17, 1.669/17 y 1.984/17.)

Repudio y consternación por el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Manchester, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (S.-1.923/17, 1.932/17 y 1.935/17.)

Adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Día Nacional de Lucha contra la Discriminación Sexual e Identidad de Género. (S.-1.832/17 y 1.870/17.)

Pesar por el fallecimiento de Manuel Mora y Araujo, analista político y social. (S.-1.961/17.)

Declaración de interés por la XXXI Fiesta Provincial y II Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal. (S.-317/17.)

Declaración de interés por la realización de un estudio comparado de la cuenca del río Tíber con las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. (S.-1.989/17.)

Solicitud de informes sobre la quita de frecuencia de vuelos diarios en la ruta Río Gallegos - Buenos Aires y otras cuestiones conexas. (S.-1.751/17.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la recuperación de la empresa Aguas y Saneamiento Argentinos. (S.-866/17.)

Homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento del periodista, escritor y traductor Rodolfo Walsh. (S.-993/17.)

Beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la ley 26.741, de soberanía hidrocarbúfera de la República Argentina. (S.-1.514/17.)

Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados a la empresa Catamarca Minera y Energética del Estado (CAMYEN), provincia homónima. (S.-674/17.)

Declaración de interés por la Banda Municipal de Música Blas Blotta, del departamento de Rivadavia, Mendoza. (S.-1.865/17.)

Beneplácito por la entrega del doctorado honoris causa al doctor Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. (S.-1.969/17.)

Declaración de interés por la diplomatura en Criminología Orientada a la Violencia de Género de la Universidad Nacional de San Juan. (S.-1.924/17.)

Declaración de interés por el documental *Aires de Francisco*, de autoría de la cineasta Claudia Dattilo. (S.-1.839/17.)

Preocupación por la publicación de la carta de comidas del restaurante Portezuelo, Salta, que asigna el nombre de mujeres a los platos de su menú de carnes. (S.-1.995/17.)

Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. (S.-1.996/17.)

Declaración de interés por el Premio Joven Empresario Argentino. (S.-1.986/17.)

Solicitud de informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación de la Obra de los Daneses, en la provincia de La Pampa. (S.-1.898/17.)

Beneplácito por la visita al país y las declaraciones del obispo Marcelo Sánchez Sorondo, referidas a la provincia de San Luis. (S.-1.338/17.)

## 22. Apéndice.

I. Actas de votación. (Pág 68.)

II. Plan de labor. (Pág 76.)

III. Asuntos entrados. (Pág 89.)

IV. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág 1519.)

V. Inserciones. (Pág 2099.)

---

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 51 del miércoles 31 de mayo de 2017:

**Sra. Presidente.** — Queda abierta la sesión.

## 1

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sra. Presidente.** — Invito a la señora senadora Pilatti Vergara a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, la señora senadora María Inés Pilatti Vergara procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

violencia. El temario de hoy es muy humanitario. Y tal como decía la senadora preopinante, se ha enriquecido este proyecto, que viene siendo analizado con mucha responsabilidad y que ha sido mejorado y enriquecido por la Cámara de Diputados.

Agregar el artículo 700 bis al Código Civil y Comercial es sumamente importante. Antes se requería una sentencia firme de un juez civil para que se produjera la pérdida de la patria potestad: hoy basta con la sentencia de haber cometido este delito aberrante como el femicidio. Este agregado implica proteger a los niños y a las niñas, porque quienes eran vulnerables después de un delito como el femicidio, eran esos niños. Entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919 víctimas colaterales de femicidio, de las cuales 1.859 eran menores de edad. De eso estamos hablando.

Este avance y el día de hoy son para que la sociedad piense que sus representantes tienen con la gente una cercanía que es loable. Hemos legislado el día de hoy para todos los temas sensibles que la sociedad nos estaba demandando.

Muchas gracias, señora presidente.

**Sra. Presidente.** – Gracias a usted, senadora.

Vamos a votar la autorización de las inserciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

**Sra. Presidente.** – Están autorizadas.<sup>1</sup>

¿Hay alguna abstención en este tema? No.

Vamos a hacer una sola votación en general y en particular, electrónicamente.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Tunessi). – Para el S.-3.685/15: 47 votos afirmativos, cero votos negativos, cero abstenciones. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>2</sup>

**Sra. Presidente.** – Este proyecto pasa al Poder Ejecutivo nacional.<sup>3</sup>

1 Ver el Apéndice.

2 Ver el Apéndice.

3 Ver el Apéndice.

## 13

### CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EGRESO DE JÓVENES SIN CUIDADOS PARENTALES (C.D.-8/17)

**Sra. Presidente.** – Ahora vamos a tratar el C.D.-8/17.

Corresponde la consideración del dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales.

Se pone a consideración del cuerpo.

Tiene la palabra la senadora Boyadjian, como miembro informante.

**Sra. Boyadjian.** – Señora presidenta: este proyecto que crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales viene ya siendo trabajado en la Comisión de Población y Desarrollo, que es cabecera, en conjunto con la Comisión de Presupuesto, a través de dos proyectos que fueron presentados por sus autores. Uno es la senadora Sandra Giménez y otro, el senador Naidenoff. También participó el instituto Doncel, que también aportó mucho para que este proyecto pudiera salir. Hoy ya tiene sanción de Diputados. Ellos también han trabajado desde su lado.

A través de este programa también vamos a crear una reparación para todos aquellos niños y adolescentes que viven en casas, instituciones u hogares y que por diversas situaciones han sufrido violencia intrafamiliar o abandono, han quedado al desamparo, han quedado huérfanos en la vida sin tener un familiar que los asista.

Con este proyecto, lo que estamos logrando es cubrir esa orfandad y que un referente pueda acompañarlos y asistirlos hasta los 18 años. Realmente lo que queremos con esta ley es fortalecer la autonomía de estos jóvenes cuando cumplan 18 a través de esta reparación o de lo que significa esta asignación que tiene que ver con un 80 por ciento del salario mínimo, vital y móvil para que puedan estudiar y llevar la vida de una forma más inclusiva en lo social y en lo emotivo.

Es un proyecto muy importante. Hay mucha gente que está esperando esta sanción –incluso en el Salón Illia– y que necesita que desde nuestro rol hoy podamos dar esa contención que necesitan esos niños que han sido abandonados

y que hoy queremos incluir dentro del programa por parte del Estado.

Gracias por la participación de todas las instituciones, por los equipos de trabajo y gracias por el acompañamiento en este día para que se sancione la ley.

**Sra. Presidente.** – Gracias senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Giménez.

**Sra. Giménez.** – Señora presidente: quiero particularmente hacer referencia en el agradecimiento y en la gratitud a la señora diputada Carrizo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autora del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación y que ha conducido el proceso que, realmente, viene a saldar una deuda histórica con un sector de la infancia argentina que, si bien fue protegida por la ley 26.061 y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los estados provinciales y municipales mediante una contención de una situación de vulnerabilidad extrema como es quedarse sin familia, hasta la fecha no pudo lograrse su ampliación de derechos; es decir, el acompañamiento asistido a la autonomía a partir del cumplimiento de los dieciocho años. Esos dieciocho años, que muchos jóvenes festejan con mucha alegría, para ellos significaban salir del esquema de contención en el cual estaban incluidos en el ámbito de las organizaciones de la comunidad, las organizaciones civiles o las organizaciones del Estado nacional, provincial o municipal de la República Argentina.

Por eso, realmente, es un hecho que hay que remarcar por la gratitud, ya que significa oportunidad. No sé si nosotros podemos sentir o experimentar en nuestra vida lo que significa la comprensión de la soledad con la cual estos jóvenes deben enfrentar la vida al no tener una familia y tan sólo los vínculos que pudieron construir con esas organizaciones que los acogieron en su momento –quizás no tan pequeños– porque, reitero, no pudieron ir a una familia de acogimiento ni a hogares sustitutos ni ser adoptados. ¿Saben cuántos son según el último censo? Se trata de más de diez mil jóvenes a lo largo de todo el país.

A partir de la sanción y promulgación de la ley, esos más de diez mil jóvenes podrán incorporarse a un nuevo proceso de acompañamiento en esa autonomía educativa, sanitaria y del

mundo del trabajo, más un proceso económico que les ayude a garantizarla.

El 80 % de la asignación mínima, vital y móvil es lo que van a percibir los diez mil jóvenes en ese proceso de acompañamiento. Un acompañamiento en un contexto realmente complejo desde el punto de vista económico.

– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador D. Federico Pinedo.

**Sra. Giménez.** – Por eso, bien vale la pena, lo reitero, expresar la gratitud a todas las organizaciones que hacen el trabajo del Estado en sus distintos niveles, ya que son las que se organizan civilmente a partir de fundaciones para brindar su amor, su cariño, su solidaridad, su entrega para aquel que lo necesita más que cualquiera.

Por eso, la coherencia en la responsabilidad del trabajo y la transversalidad de los temas que, justamente, nos obliga a llenarnos de esperanza y saber que la misión en esta tarea está cumplida.

Fue uno de los primeros proyectos presentados por mí allá por los años 2012, 2014, 2016 y 2017, siempre intentando esta búsqueda del consenso político para lograr una realidad: percibir la ayuda del Estado a partir de la vulnerabilidad extrema.

Para finalizar, luego acercaré la inserción de la alocución completa a la Secretaría Parlamentaria, solamente me queda decir que Misiones fue la primera provincia que en 2002 sancionó la Ley de Infancia del Niño, Niña y Adolescencia de la Argentina, incluso, previo a la ley 26.061, que también fue impulsada por una misionera, la licenciada Mercedes Oviedo de Ifrán, senadora y ex vicegobernadora de la República..., perdón, de la provincia de Misiones, que supo enseñarnos a todos nosotros, en el campo de lo social en la provincia de Misiones, la responsabilidad del Estado en su conjunto, esa visión de contención, y la que también hoy quiero honrar.

Así que muchísimas gracias al desafío de haber podido conciliar la presentación en la Comisión de Población y Desarrollo y en la Banca de la Mujer para poder lograr esto en tiempo récord, porque esto ha sido sancionado hace no más de un mes y medio. Y eso también



habla de nuestro compromiso y responsabilidad política en poner en agenda acciones que realmente repercuten e impactan en la protección y en el estado de derecho de la infancia y de la adolescencia de la República Argentina.

Muchísimas gracias, señor presidente.

**Sr. Presidente** (Pinedo). – Gracias, señora senadora.

Senador Naidenoff: tiene la palabra.

**Sr. Petcoff Naidenoff**. – Brevemente, primero quiero coincidir con la senadora Giménez en el hecho de poner en valor la tarea de la diputada Carla Carrizo porque, en definitiva, el que he presentado en este Senado prácticamente es de su autoría y de la fundación.

Es cierto: son más de diez mil niños, son 14.675, según el último relevamiento, y de lo que se trata es de equiparar la responsabilidad de los padres que otorga el Código Civil para con los hijos con esta responsabilidad parental; es decir, estos chicos que están en estas instituciones, y que el Estado asuma su rol.

Solamente, quiero dejar en claro que es un acompañamiento que tiene dos miradas muy claras: por una parte, el acompañamiento del Estado hasta los 21 años para la contención emocional, en esa transición cuando salen del instituto. Y, en segundo lugar, que se hace extensivo hasta los 25, con el compromiso de continuar sus propios estudios. Es decir, por una parte el Estado cumple con los compromisos internacionales, pero también asume con mucho sentido común esta idea de equiparar derechos y de avanzar en esta línea.

**Sr. Presidente** (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Si no hay más oradores, se van a votar las inserciones.

–Se practica la votación a mano alzada.<sup>1</sup>

**Sr. Presidente** (Pinedo). – Creo que en este caso no habrá abstenciones, porque no hubo pedidos en tal sentido. Así que, si les parece bien, vamos a votar en general y en particular en una sola votación.

Falta que se identifiquen algunos senadores.

Se va a votar en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

**Sr. Secretario** (Tunessi). – Para el C.D.-8/17: afirmativos, 47 votos; negativos, cero votos; cero abstenciones. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.<sup>2</sup>

**Sr. Presidente** (Pinedo). – Aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación.<sup>3</sup>

## 14

### RÉGIMEN DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS (O.D. N° 156/17)

**Sr. Presidente** (Pinedo). – A continuación, se va a tratar el Orden del Día N° 156.

Señor secretario.

**Sr. Secretario** (Tunessi). – Es un dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Riofrío, en el que se establece un régimen de reparación a las víctimas del delito de trata de personas. S.-533/17.

**Sr. Presidente** (Pinedo). – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.

**Sra. Riofrío**. – Señor presidente, quiero comenzar agradeciendo la predisposición que han tenido el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador Lovera, y el senador Abal Medina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; también, a todos los integrantes de la Banca de la Mujer. Hicimos una plenaria de tres comisiones para lograr sacar dictamen de un proyecto que había sido aprobado por este Senado en noviembre de 2015, que se giró a Diputados, pero lamentablemente no fue tratado. Lo cierto es que la vida sigue transcurriendo y siguen ocurriendo tragedias para muchos seres humanos, mientras algunos diputados no toman decisiones –digamos– generosas, en cuanto a trabajar sobre las sanciones que manda este Senado.

Este es un proyecto que busca una reparación para las víctimas de trata, con sentencia firme.

<sup>2</sup> Ver el Apéndice.

<sup>3</sup> Ver el Apéndice.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.

**Proyecto:** CD - 8/17



**Descripción:** SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

**Tipo Quorum:** MAS 1/2 MC

**Fecha:** 31/05/2017 16:54:06

**Acta :** 4

**Mayoría:** MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

**Miembros del cuerpo:** 72

**Votación:** NOMINAL

**Presidente:** Pinedo, Federico

**Presentes:** 47 **Ausentes:** 25 **AMN:** 24

**Afirmativos:** 47  
**Negativos:** 0  
**Abstenciones:** 0  
**Resultado:** AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abal Medina, Juan Manuel	SI	14	37. Leguizamón, María Laura	AUSENTE	
2. Aguilar, Eduardo Alberto	SI	53	38. Linares, Jaime	AUSENTE	
3. Aguirre, Hilda Clelia	SI	2	39. Lovera, Daniel Aníbal	AUSENTE	
4. Almirón, Ana Claudia	SI	24	40. Luenzo, Alfredo Héctor	SI	70
5. Alperovich, José Jorge	AUSENTE		41. Luna, Mirtha M. T.	SI	27
6. Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	42. Marino, Juan Carlos	AUSENTE	
7. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	43. Martínez, Alfredo Anselmo	SI	40
8. Blas, Ines I.	SI	28	44. Martínez, Ernesto Félix	SI	67
9. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	72	45. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
10. Braillard Pocard, Pedro	AUSENTE		46. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
11. Cabral, Salvador	SI	50	47. Mera, Dalmacio	AUSENTE	
12. Caserio, Carlos Alberto	SI	71	48. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	8
13. Castillo, Oscar Aníbal	AUSENTE		49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Catalán Magni, Julio César	AUSENTE		50. Negre de Alonso, Liliana Teresita	SI	39
15. Cobos, Julio	SI	21	51. Odarda, María Magdalena	SI	48
16. Crexell, Carmen Lucila	SI	63	52. Ojeda, José Anatolio	AUSENTE	
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pais, Juan Mario	SI	35
18. Durango, Norma Haydee	SI	7	54. Pereyra, Guillermo Juan	AUSENTE	
19. Elías de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	55. Perotti, Omar Angel	SI	60
20. Espínola, Carlos Mauricio	AUSENTE		56. Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
21. Fellner, Liliana Beatriz	AUSENTE		57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	43
22. Fernández Sagasti, Anabel	SI	55	58. Pichetto, Miguel Ángel	AUSENTE	
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	26	59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	54
24. Fuentes, Marcelo Jorge	AUSENTE		60. Pinedo, Federico	SI	Presidente
25. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	51	61. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
26. García, Virginia María	SI	12	62. Ríofrío, Marina Raquel	SI	13
27. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI	41	63. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	23
28. Giménez, Sandra D.	SI	57	64. Rodríguez Saá, Adolfo	AUSENTE	
29. Godoy, Ruperto Eduardo	SI	34	65. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Rozas, Ángel	AUSENTE	
31. González, Nancy Susana	SI	9	67. Sacnun, María de los Angeles	SI	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	AUSENTE		68. Solanas, Fernando Ezequiel	SI	47
33. Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	69. Urtubey, Rodolfo Julio	AUSENTE	
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	30	70. Varela, Marta	SI	66
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	71. Verasay, Pamela	SI	45
36. Labado, María Ester	SI	11	72. Zamora, Gerardo	AUSENTE	

5

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA DURANGO

**Régimen de subsidios especiales para los menores  
huérfanos de madre por causa de femicidio.  
(S.-206/16 y otros.)**

Señora presidente:

Desde hace muchos años insistimos en no hablar sólo de las víctimas de femicidio o en no considerar víctimas sólo a las mujeres asesinadas, porque cuando una mujer es asesinada hay tres generaciones que son desmembradas: la propia víctima, sus madres y padres y, fundamentalmente, quienes nos ocupan en este proyecto: sus hijas e hijos. Cuando su madre es asesinada por su padre, ellos sufren una triple pérdida: la de sus progenitores, y la de su proyecto de vida y confención.

No sólo las víctimas de femicidio están incorporadas en esta iniciativa: incluye tanto a madres como a padres asesinados en un contexto de violencia de género o intrafamiliar. Asimismo, este proyecto incorpora también vínculos familiares diferentes como el que configura un matrimonio igualitario, padres adoptivos y las figura de progenitora o progenitor afín.

A partir del análisis profundo de la situación de las denominadas “víctimas colaterales” de la violencia, ante la ausencia de una asistencia integral y del descubierto en la protección de las niñas y niños que quedan bajo la guarda de la familia –muchas veces sin suficientes recursos económicos para llevar adelante el desarrollo de esa nueva vida de las y los hijos de la víctima–, obviamente, como sociedad nos debíamos esta ley.

En nueve años, desde 2008 a 2016, se registraron en nuestro país 2.919 casos de hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales de femicidio. De ellas, 1.859 son menores de edad.

Quiero reconocer la tarea de visibilización realizada por la organización La Casa del Encuentro y del Observatorio de Femicidios en la Argentina “Adriana Marisel Zambrano” –que aportó las primeras estadísticas en este sentido–, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina (RIPVG) –que junto con la organización Amigos del Alma también impulsó esta sanción–, y del resto de las personas que individual y colectivamente dieron los primeros pasos en la redacción del proyecto original conocido como “Ley Brisa”.

Reconozco también el trabajo realizado en comisión para unificar proyectos similares y los aportes que pudimos hacer para extender el alcance de los beneficios de esta ley.

Esta iniciativa reconoce la necesidad de un apoyo integral para estas niñas y niños que quedan huérfanos y que necesitan imperiosamente una ayuda económica, que debe ser mensual y segura; también, la cobertura de una obra social para que puedan contar con una su-

marísima atención de su salud mental y física, porque las secuelas que este tipo de hechos dejan en sus vidas son altamente traumáticas y los afectan en múltiples aspectos.

En promedio, cada semana son seis las niñas y los niños a quienes les matan a su madre. En la mayoría de los casos, sus padres resultan detenidos por ser responsables de esos femicidios. Los chicos quedan desamparados, dependen de otros familiares o, en el peor de los casos, son trasladados a hogares o institutos de menores.

Por lo expuesto, adelanto mi voto favorable a esta iniciativa.

6

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA DURANGO

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías  
de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)**

Señora presidente:

Nos encontramos tratando un proyecto que entendemos resultaba absolutamente necesario para fortalecer el rol de la víctima en el proceso penal en el que se ventila la afectación de sus propios derechos.

Antes que nada, debemos decir que participamos de la idea de que el imputado debe contar con los derechos y garantías que le permitan afrontar el poder punitivo del Estado que reprocha su conducta.

No obstante ello, con la misma convicción entendemos que la víctima afectada por el hecho investigado por los efectores del sistema penal debe ver facilitadas sus posibilidades de contar con un protagonismo que hoy muchas veces se les ve negado, especialmente cuando se trata de personas vulnerables. Sabido es que, en muchos casos, la posibilidad de participar en el proceso a través de la figura del querellante requiere del patrocinio de un abogado particular, con los costos económicos que ello significa. De esta forma, el proyecto en tratamiento aspira a terminar –o, al menos, a morigerar– la revictimización que acarrea para el damnificado el desarrollo de un proceso penal en el que, paradójicamente, se investigan afectaciones a sus derechos y donde muchas veces no es otra cosa que un convidado de piedra.

En tal sentido, resaltamos como uno de los aspectos más elogiados de la iniciativa las notificaciones que se deberán cursar a la víctima sobre los hitos más relevantes del proceso penal en la medida en que el mismo avanza o, incluso, respecto de las novedades que se produzcan en la ejecución de la pena.

También debemos resaltar el rol federal que cumplirá el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos que se creará en el ámbito de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, sobre todo en su función de asistencia en forma



coadyuvante que podrá prestar a las Justicias provinciales. También, la colaboración que podrá prestar a las jurisdicciones que ya cuentan con organismos de protección a las víctimas.

Asimismo, celebramos la creación del cargo de defensor público de víctimas en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, quiero resaltar el trabajo de las comisiones de este Senado para la concreción de un texto que entendemos es superior de la media sanción que vino de Diputados y que logró, a través de la readecuación de cargos del Ministerio Público, moderar el gasto que requería la estructura que el texto de Diputados propiciaba.

Resaltando que entiendo que esta iniciativa constituye una medida de política criminal que torna más justo al sistema penal, adelanto que votaré favorablemente el presente proyecto de ley.

7

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR LOVERA

**Solicitud de informes sobre diversos aspectos  
relacionados con la licitación de la Obra  
de los Daneses en la provincia de La Pampa.  
(S.-1.898/17.)**

Señora presidente:

Tenemos en claro que hay consultas urgentes y otras impostergables. La situación hídrica de la provincia de La Pampa cumple con ambas cualidades. La producción, el tránsito y la vida misma se han visto modificados con una nueva calamidad cíclica tal como es la inundación que, por diferentes motivos, sacude fuerte al territorio del norte provincial.

Es evidente que la Nación, durante décadas, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de diferentes instituciones, como universidades y ONG, que aconsejaban la realización de obras para morigerar esta clase de fenómenos que cada determinado tiempo, obedeciendo ciclos conocidos, azotan gran parte de nuestro territorio. Hoy nos encontramos nuevamente frente a esta problemática que daña la estructura de la red caminera y a pueblos enteros a lo largo y ancho de la Argentina; que genera un desastre en la maquinaria productiva del interior, con graves consecuencias no sólo para las provincias, sino también para el Estado nacional.

En la provincia de La Pampa hay diversas localidades que están en grave situación al tener comprometido los cascos urbanos. Sumado a esto, muchos productores encuentran grandes problemas de suelo para sacar su producción y, tantos otros, directamente han perdido gran parte de su capital productivo.

Necesitamos que se realicen de manera urgente estas obras de mitigación. Los tiempos de la burocracia no se corresponden con las necesidades perentorias que

tienen estos argentinos que han visto cómo el agua se llevaba el esfuerzo de años de trabajo. A esta dramática situación debemos sumar a niños que no pueden asistir a la escuela, problemas de salud y proliferación de alimañas, entre otros males que son producto directo del fenómeno climático.

Lamentablemente nuestra provincia se ha visto utilizada como zona de sacrificio. Lo hemos visto desde hace décadas con el corte del río Atuel, la sobreutilización del Desaguadero, etcétera.

En la primera administración del ingeniero Verna como gobernador –2003 a 2007– se trabajó con el Instituto Danés de Hidráulica para la construcción de la denominada Obra de los Daneses, que solucionaría el problema de los excedentes de agua de gran parte del noreste del territorio de La Pampa. Solamente pudo realizarse la primera etapa y, luego, la Nación cortó el financiamiento. ¿Por qué? Por los tiempos de la burocracia. Hemos visto con agrado que en la Cámara baja se incluyó en el presupuesto 2017 la segunda y la tercera etapa de la Obra de los Daneses para que en un bajo, en cercanías de Quemu-Quemu, el agua que inunda el norte pampeano durante ciclos lluviosos como el actual sea contenida. La segunda etapa consiste en una nueva presa para generar otro embalse, en este caso ubicado en el paraje La Puma, en el cruce de las rutas provinciales 6 y 3, en cercanías de la estación Trilí. Uno de los canales que colectará el agua de la zona y la llevará hasta el embalse nacerá en Monte Nievas. De concretarse el proyecto tal como fue pensado originalmente, el agua no seguirá su pendiente natural hacia la provincia de Buenos Aires, sino que se la embalsará en una zona de depresión del suelo en La Pampa. Como podemos apreciar, esta obra mejorará notablemente la problemática, por lo que resulta perentoria su construcción.

Presentamos este proyecto a los efectos de tener información fidedigna sobre los mecanismos que el Poder Ejecutivo nacional está implementando para la concreción de la obra en virtud de que el Congreso nacional ya la habilitó con la mencionada inclusión en el presupuesto.

Es por ello que preguntamos:

- a) Si ha comenzado la licitación para la obra;
- b) Fecha de inicio; y
- c) Los plazos de ejecución de la obra.

A la vez, junto con este, presentamos otro proyecto de comunicación sobre el particular en el que, ante la preocupante situación en que se encuentran varios departamentos del norte de la provincia de La Pampa, exhortamos al Poder Ejecutivo nacional a que, a través de los organismos correspondientes, proceda a efectuar la licitación para el comienzo de la Obra de los Daneses en el presente año.

Finalmente, remarcamos que la llamada Obras de los Daneses es un proyecto urgente para la provincia de La Pampa. Por este motivo, esperamos que el Poder

Ejecutivo nacional tome la decisión política de aliviar a los productores y pobladores de la provincia de un terrible impacto climático.

8

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR LOVERA

**Declaración de zona de desastre y emergencia  
en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17,  
S.-1.673/17 y S.-1.997/17.)**

Señora presidente:

En el departamento Puelén, puntualmente en las cercanías de la ciudad de 25 de Mayo, existen diversos emprendimientos productivos dedicados a la producción de peras que no escapan a las generalidades del resto de las provincias mencionadas en el presente proyecto.

La medida excepcional tendiente a la declaración de emergencia económica, productiva, financiera y social por 365 días pondrá en igualdad a los productores de La Pampa, Mendoza y San Juan junto a los de Neuquén y Río Negro, anteriormente beneficiados.

Esta actividad, fuertemente golpeada, entró definitivamente en crisis al aplicar la República del Brasil barreras sanitarias que fueron impuestas a nuestras exportaciones.

Este proyecto, que avalamos y acompañamos, incorpora a provincias, incluida La Pampa, en los beneficios establecidos por la ley 27.354, hasta aquí vigentes sólo para Neuquén y Río Negro.

Atento a la cruda realidad que viven los productores pampeanos, no puedo menos que expresar mi total apoyo al presente proyecto de ley.

9

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR LOVERA

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías  
de las Víctimas de Delitos. (C.D.-81/16.)**

Señora presidente:

El presente proyecto de ley es una herramienta más en pos de salvaguardar y ratificar los derechos y garantías de las víctimas de delitos que, de por sí, están en una situación delicada y traumática por los hechos que las tienen como protagonistas.

Luego de las distintas exposiciones –en las reuniones públicas convocadas por las comisiones de Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda– de distintos especialistas y de víctimas, con testimonios extremadamente conmovedores, hemos tomado conciencia de la necesidad de avanzar en la aprobación de este proyecto. Se han consensuado modificaciones, teniendo especial cuidado en contemplarlas todas en esta misma ley y procurando con ello no dejar

nada librado a futuras aprobaciones de otras leyes que sólo retardarían la posibilidad de cualquier víctima de delito de contar con la protección y con la posibilidad de ejercer sus derechos contemplados en este proyecto.

Es por ello que avanzamos en la idea de normar, entre otras cuestiones, el derecho de las víctimas a contar con un defensor público, disponiéndose para ello la creación de veinticuatro cargos de defensor público de víctimas, atendiendo de esta manera uno de los requerimientos fundamentales de las víctimas de delitos. El planteo generalizado ha sido la sensación de inequidad manifestada en las que las dejaba el Estado al otorgar a los imputados el derecho a un abogado representado por el defensor público oficial, no pudiendo las víctimas tener este mismo derecho cuando sienten claramente que son las titulares del conflicto. Por ello, se incorpora al Ministerio Público de la Defensa a los defensores públicos de víctimas, quienes ejercerán la asistencia técnica y el patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa. Creemos que con esta incorporación contribuimos a reparar dicha inequidad.

Todas las acciones por parte del Estado –que es el que tiene la potestad de velar por la seguridad e integridad de los ciudadanos– que puedan ser una suerte de bálsamo ante estas situaciones tendrán mi apoyo

Brindar todos los instrumentos posibles, desde la asesoría legal hasta la reforma de dependencias y procedimientos de la Justicia para actuar con inmediatez y presteza, y propender a la creación de instancias de procedimientos expeditivos e información a las víctimas, es una óptima sumatoria de iniciativas que en esta ley se contempla de manera clara y precisa. Se trata, en última instancia, de procurar de manera efectiva protección y acompañamiento legal a las víctimas de delito.

Resumiendo el proyecto en cuestión, podemos decir que hoy las víctimas de delito tendrán derecho a:

–Que se les reciba de inmediato la denuncia del delito por el que fueron afectadas, además de ser informadas sobre sus derechos cuando realicen la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento, recibiendo un trato digno y respetuoso.

–Poder requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés a través de los órganos competentes.

–Ser asistidas, en forma especializada, con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes.

–Intervenir como querellantes o actores civiles en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por la

garantía constitucional del debido proceso y a las leyes de procedimiento locales.

–Examinar documentos y actuaciones, y ser informadas verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado, así como aportar información y pruebas durante la investigación.

–Ser escuchadas antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal.

–Ser notificadas de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchadas.

–El sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos cuando, por sus circunstancias personales, se encontraran económicamente imposibilitadas de solventarlos.

En los casos de salidas transitorias, como en los casos de libertad condicional, la víctima –aun cuando no se hubiese constituido en querellante– será informada de la iniciación del trámite y serán oídas sus necesidades.

En miras a enfocar la protección del Estado hacia las víctimas de delito, se crean Centros de Asistencia a las Víctimas de Delito (Cenavid) en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que tendrán las siguientes funciones:

–Atender de inmediato a las víctimas que requieran su intervención. A tal fin, se deberá implementar un servicio de urgencia que funcione fuera del horario de atención de sus oficinas que le permita garantizar la asistencia de la víctima en los casos que requieran perentoria intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar la seguridad de la víctima y de sus familiares, en los casos que correspondan. A tal fin, convendrá con los organismos a cargo de la seguridad pública protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para brindar a la víctima un hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia, en los casos que corresponda. A tal fin, convendrá con los organismos e instituciones capacitados para brindarles protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para la atención médica y psicológica de la víctima, en los casos que corresponda. A tal fin, convendrá con las instituciones a cargo de la salud pública protocolos de actuación que permitan su rápida intervención.

–Adoptar los cursos de acción necesarios para garantizar el patrocinio y representación jurídica de la víctima, dándole intervención al Ministerio Público de la Defensa cuando corresponda. Asimismo, acordará mecanismos de cooperación con colegios profesionales, instituciones educativas o académicas u otras asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que se encuentren capacitados para brindarlas.

Señora presidente: también quiero compartir algunas reflexiones.

Estar hoy dando el voto positivo a esta iniciativa me provoca, además de satisfacción, un cierto alivio. Una persona que es víctima de un delito sufre física, psicológica y socialmente. Ese sufrimiento es causado por la conducta violenta a la que fue sometida. Todo esto produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectiva, por lo que el delito no solamente afecta profundamente a la víctima, sino también a su familia y a su comunidad. La agresión causada le crea un sentimiento de vulnerabilidad, de angustia, de desconfianza, de inseguridad individual y social. Como mencionan algunos autores, le genera “una verdadera situación de estrés porque significa un daño y un peligro que se refleja en el vivir con el temor y la angustia de ser agredida nuevamente”.

Me hago una pregunta, señora presidenta, señores senadores y senadoras: como sociedad, ¿tenemos la preparación, contamos con la capacidad para poder brindar a la víctima la ayuda necesaria y suficiente? La respuesta es compleja. Si hay algo sobre lo que tengo certeza –siempre bajo la regulación del Estado y de sus instituciones– es que todo debe comenzar en la familia: en la promoción y prevención de vínculos saludables; en el trabajo para el bien común.

Señora presidente: espero y ansío que, con esta herramienta, todos y cada uno de los integrantes de nuestra sociedad nos intereseamos más por la víctima del delito. Sostengo que es muy difícil establecer las verdaderas dimensiones del daño recibido por la víctima, pero esto nunca debe ser un motivo deliberado para responsabilizarla o quitar culpas al delincuente.

Creemos que al incorporar al Código los derechos que asisten a las víctimas de delito hemos dado respuesta a lo requerido por las víctimas en cuanto a ser oídas y a ser partes del proceso, como creemos que deben serlo. Pudimos también lograr que sea factible la aplicación del proyecto que venía de Diputados al dotarlo de previsión de fondos para su funcionamiento; y, finalmente, con la creación de los veinticuatro cargos de defensores públicos de víctimas y el desplazamiento de los demás cargos de la Defensoría General de la Nación, pudimos atender a la necesidad específica planteada sin desarticular el instituto de la defensa y previendo, en los casos específicos, las respectivas partidas presupuestarias a tal fin.

Para terminar, sostengo firmemente que como Estado, cada uno desde el lugar que ocupa, debemos trabajar ardua y profundamente para que los delitos cometidos sean cada vez menos; para que las víctimas de delitos sean cada vez menos. Todo ello, para que nosotros y las generaciones que vienen vivan en una sociedad sana y en paz.

Por lo todo expuesto, fundamento mi voto afirmativo a este proyecto con la seguridad de que estamos legislando de manera adecuada para dar respuesta a la demanda de nuestra ciudadanía ante hechos que vulneran sus derechos.

12

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIMÉNEZ

**Programa de Acompañamiento para el Egreso  
de Jóvenes sin Cuidados Parentales. (C.D.-8/17.)**

Señora presidente:

Nos disponemos, como Cámara revisora, a dar sanción a un proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, que ha sido considerado en este Honorable Senado, juntamente con un proyecto de ley del senador Petcoff Naidenoff registrado bajo el expediente S.-1.691/16 y un proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.-132/17. Hoy buscan el consenso en este recinto para convertirse en ley y llevar al colectivo de los adolescentes sin cuidados parentales una respuesta concreta a una problemática que debe ser abordada en su integralidad, en el marco de los derechos que la Constitución reconoce a los niños/as y adolescentes para atravesar la transición a la vida adulta en su plenitud y potencialidad.

Estoy orgullosa como senadora por la provincia de Misiones de haber sido parte del proceso de intenso trabajo, de la conciliación y de los acuerdos políticos que hoy dan sus frutos a través de la creación de un espacio institucional específico para abordar la problemática de los adolescentes sin cuidados parentales en la transición a la autonomía que nos permita, por fin, darles una contención en la transición hacia la mayoría de edad cuando han transitado buena parte de su vida en una institución. Este es el objetivo principal del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, que deberá garantizar su plena inclusión social, así como su máximo desarrollo personal y social.

Soy coherente con mi propia historia política al apoyar esta iniciativa, porque Misiones ha sido la primera provincia en dar a luz una ley de infancia en la República Argentina, allá por 2002, la ley 3.820, antecedente inmediato de la ley 26.061.

Misiones es una provincia joven institucionalmente y también en nuestra conformación social. Haciéndome cargo de esa responsabilidad, continuando el trabajo de Mercedes Oviedo, la primera vicegobernadora mujer de mi provincia, es que traje esa experiencia desde Misiones a la Nación buscando fortalecer la institución del acogimiento familiar extendiendo el derecho a percibir la AUH de los niños/as y adolescentes sin cuidados parentales; también, buscando la promoción y protección integral de los derechos de los adolescentes sin cuidados parentales, respectivamente, con iniciativas concretas. Hoy una de ellas obtiene el consenso necesario para constituirse en una ley de la República Argentina.

Merece ser destacado el trabajo para encontrar los consensos políticos necesarios a efectos de arribar a este resultado. La política es el arte de lo posible y hoy es posible llegar al colectivo de los menores sin

cuidados parentales en transición al ejercicio pleno de su autonomía con una medida concreta, que buscará abordar integralmente la problemática que implica la transición en sí misma.

El proyecto bajo tratamiento tiene por objetivo la construcción de un espacio institucional de acompañamiento de los adolescentes sin cuidados parentales que, ya sea en instituciones o en familias de acogimiento, atraviesan la transición desde el sistema de protección previsto en la ley 26.061 hasta la plena autonomía, hoy en completa soledad. La adquisición de la autonomía en el caso de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales no tiene previsto un proceso que los contenga, estableciendo el fortalecimiento de la autonomía progresiva. La realidad es que los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales carecen de un esquema de contención que fortalezca la autonomía progresivamente. Entonces, a partir de que cumplen 18 años se encuentran solos, aislados, sin redes familiares o sociales, y sin preparación para enfrentar lo cotidiano. A partir de que cumplen 18 años automáticamente cesa el esquema vigente para darles cuidados alternativos. Así, de un día para el otro, se encuentran obligados a resolver una serie de cuestiones que hasta entonces eran desconocidas, generando una situación de vulnerabilidad en un proceso de transición ya de por sí abrupto. El programa de egreso previsto en la ley busca abordar integralmente la problemática multidimensional de la transición, protegiendo los derechos de los adolescentes que voluntariamente decidan participar acompañados de este proceso, reconociendo la autonomía progresiva consignada en la reforma del Código Civil.

Mientras una gran parte de la sociedad tiende a quedarse más tiempo en el ámbito sostenido por la familia –porque estudian o tardan en conseguir su primer empleo–, los adolescentes que se encuentran bajo cuidados alternativos deben resolver autónomamente muchas otras cuestiones en forma repentina, sin herramientas. Esto se suma a la debilidad o carencia de redes familiares o sociales debido a los extensos períodos de permanencia en las instituciones. Más aun: la movilidad/rotación de los adolescentes por distintos hogares genera falta de estabilidad, fragmentación y acentúa el aislamiento. Además, es una constante la falta de preparación para la independencia económica –identificación de vocaciones, desarrollo a través del estudio, formación de habilidades y aptitudes para el trabajo– y la falta de preparación para ejercer sus derechos en forma autónoma. Como consecuencia, en muchos casos los adolescentes se encuentran forzados a volver a un ambiente familiar del cual fueron aislados como medida de protección, o bien caer en situación de calle y de extrema vulnerabilidad.

La construcción de un ámbito institucional focalizado en la transición busca garantizar una inserción social, laboral, educativa y habitacional adecuada, que claramente no puede resolverse a los 18 años en la sociedad actual, más aún en una situación de vulnerabilidad como la que constituye la de los niños,



niñas y adolescentes sin cuidados parentales. El acompañamiento integral del Estado en la protección de los derechos del adolescente, el apoyo económico y la formación, constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se apoyan las iniciativas que todos aquellos que abordamos la temática en estos años, a través de aportes concretos, hemos conformado como un núcleo de consenso que hoy se plasma en una ley para toda la República Argentina. Cada uno de los autores hemos transitado por andariveles diferentes en el proceso de elaboración de nuestros proyectos, apoyados en diferentes equipos de trabajo, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Sin embargo, un núcleo de consenso nos aglutinó y mostró un nivel de madurez que se reflejó en la ley que sancionaremos.

Los países de la región deben reafirmar su compromiso de orientar sus políticas hacia la desinstitutionalización. Esto debe conducirnos no sólo a disponer de formas de cuidado que no impliquen la colocación de los niños en instituciones, sino también a promover un conjunto de prácticas dirigidas a asegurar la reintegración del niño a su medio familiar, siempre que ello sea posible y adecuado a su interés superior o, en su caso, procurar la colocación en formas de cuidado alternativas de tipo familiar o la adopción. En consecuencia, en los casos excepcionales en los que se haya recurrido a la institucionalización, la reinserción social debe prepararse lo más pronto posible en el entorno de acogida y, en cualquier caso, mucho antes de que el adolescente lo abandone.

Desde que se incorporaron las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución Nacional –artículo 75– en 1994, se han adaptado progresivamente tanto las leyes nacionales como provinciales relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, la legislación sobre tutela de la infancia –la Ley de Patronato de Menores 10.903, de 1919– fue modificada en 2005 conforme a las normas de la convención. La nueva ley 26.061, sobre la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sienta las bases de un sistema de justicia de menores y exige la reintegración de los niños institucionalizados a la sociedad. Este marco nacional reduce la carga de la intervención judicial en querellas que involucran a niños, niñas y/o adolescentes, dándoles prioridad al niño y a su familia, y teniendo en cuenta al niño como sujeto de derechos.

Los casos de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas, así como de infractores por debajo de la edad de responsabilidad penal, han sido eliminados de la esfera judicial y delegados a autoridades administrativas y municipales. Sólo se prevé la participación de la Justicia en la supervisión y evaluación de casos en los que el niño sea separado de su familia de origen por razones de protección, y entregado a familias sustitutas o a una institución residencial.

En 1990, la República Argentina ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDN) y en

1994 este documento se integró al artículo 75 de la Constitución Nacional. Así, la condición jurídica del niño cambió y se dejó de ver como objeto de derecho para ser definido como sujeto de derechos. Este cambio –tomado luego por las legislaciones provinciales–, desde la disciplina del derecho constituye el paradigma jurídico de protección integral de la niñez. Este nuevo paradigma supone que la familia es la institución privilegiada para criar a sus hijos y el Estado asume el rol de garante de que ésta cumpla su función. Este cambio ha de sustentarse en prácticas institucionales acordes.

El último informe publicado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y UNICEF indica que existen en la República Argentina casi 10.000 niños, niñas y adolescentes bajo cuidados alternativos –es decir, instituciones o esquemas de acogimiento– que son “devueltos” a la sociedad en una situación de vulnerabilidad muy superior a la que ya padecían al ingresar a la institución o al hogar por encontrarse sin cuidados parentales. De estos niños, niñas y adolescentes, 87 % está en instituciones asistenciales –714 instituciones en todo el país– que deben abandonar al cumplir los 18 años. A partir de aquí comienzan a recorrer un camino de reinserción social, generalmente enmarcado en un contexto de gran soledad y discriminación, sin asistencia del Estado. Los motivos principales de este difícil contexto son la falta de redes sociales y de pertenencia estables, el bajo nivel educativo y, como mencionaba anteriormente, el fuerte aislamiento social. Es en este contexto en el que esta propuesta legislativa tiende a generar un espacio institucional de contención para los adolescentes sin cuidados parentales que, institucionalizados o en una familia de acogimiento, deben aprender a transitar el camino a una vida adulta en pleno ejercicio de sus derechos.

Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo para la iniciativa en consideración.

13

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIMÉNEZ

### **Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)**

Señora presidente:

Nos proponemos tratar la media sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados del proyecto de Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, que fue ampliamente debatido en el seno del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara en las cuales, después de escuchar a víctimas, asociaciones que las nuclean, expertos y especialistas, tras un análisis exhaustivo se ha decidido reenviar el proyecto a la Cámara de Diputados con modificaciones, alcanzando una versión de consenso que hoy resulta políticamente viable.



El proceso de construcción de esta norma fue una expresión del trabajo conjunto de la sociedad y de los legisladores buscando dar una respuesta a una cuestión compleja: la representación y protección del derecho de las víctimas en el proceso penal, garantizándoles el patrocinio jurídico gratuito. Sin lugar a dudas un Congreso abierto a escuchar las necesidades de la población es un Congreso que está vivo, que cumple su rol en democracia, que representa a través de la responsabilidad política los intereses del pueblo de la República Argentina.

Todas las víctimas de delitos, sin distinción de si éstos son graves o leves, serán asesoradas. Las víctimas de delitos graves gozarán de asistencia jurídica. Dada la orfandad procesal de las víctimas, desde el Senado se propuso una modificación del proyecto que aún está en discusión: la creación del defensor de los derechos de las víctimas, quien deberá asistirles legalmente y patrocinarlas en cualquier jurisdicción, en cualquier posición procesal que asuman, incluida la de querellante particular o actor civil. Además, agrega que los defensores públicos de las víctimas actúan en todos los procesos comprendidos en la Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, en caso de que la víctima no cuente con abogado particular y a solicitud de ella.

Una víctima silenciada en el proceso penal pasa por un proceso de revictimización. Debemos superar la indiferencia que históricamente ha tenido la Justicia con las víctimas para tener una defensa equitativa durante el proceso, no buscando venganza, sino representación legítima en el camino a la justicia.

Hasta hoy, la normativa argentina en materia del proceso penal permitió a los delincuentes ejercer su legítima defensa con el patrocinio del Estado garantizando el ejercicio de las garantías constitucionales, pero las víctimas no podían participar como querellantes con el patrocinio del Estado. La balanza de la justicia se ha equilibrado. La demanda social se ha elevado y el Congreso responde con medidas concretas que se incorporan al plexo normativo y que deberán fortalecerse con la acción política que dote a la Justicia de los recursos humanos y económicos tendientes a implementar la ley con equidad.

Por lo expuesto, adelanto mi apoyo a la iniciativa bajo tratamiento.

14

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIMÉNEZ

**Régimen de subsidios especiales para los menores  
huérfanos de madre por causa de femicidio  
(S.-206/16 y otros)**

Señora presidente:

El proyecto de ley denominado “ley Brisa” –de autoría del senador Linares y de las senadoras Aguirre

e Iturrez de Cappellini– busca la reparación económica y la asignación de una cobertura de salud para las víctimas colaterales –como lo son los niños, niñas y adolescentes– del femicidio de su progenitora o del fallecimiento de alguno de sus progenitores a causa de violencia familiar.

Es fundamental que ante la ausencia del Estado, que no puede evitar ni prevenir el resultado de la pérdida de su progenitora por delito de femicidio o de alguno de sus progenitores por violencia familiar, sea el mismo Estado el responsable de garantizar los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes que requieran ser cubiertos.

En promedio, cada semana son seis las niñas y los niños a quienes les matan a su madre. En la mayoría de los casos, sus padres resultan detenidos por ser responsables de esos femicidios. Los chicos quedan desamparados y dependen de otros familiares o, en el peor de los casos, son trasladados a hogares o institutos de menores.

Según la asociación civil La Casa del Encuentro, entre los años 2008 y 2016 se registraron 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio; y 1.859 son menores de edad.

Aquellos niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre por culpa del homicida, que es su propio padre, sufren inevitablemente. Si bien una reparación económica no les devolverá a su madre con vida, sí les permitirá acceder al derecho a una cobertura de salud. Se trata de una reparación económica equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos, y los ayudará a cubrir sus necesidades básicas para el desarrollo y el crecimiento de su vida hasta los veintiún años de edad.

Con este proyecto se logra visibilizar que no son sólo las mujeres las víctimas, sino que también están los niños, niñas y adolescentes quienes sufren su pérdida.

15

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIMÉNEZ

**Modificación de la ley 23.351, de Bibliotecas Populares, respecto de la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico (O.D. N° 163/17)**

Señora presidente:

Acompaño con mi voto el presente proyecto de ley de las señoras senadoras Durango y Pilatti Vergara –S.-1.325/16– por el que se modifica la Ley de Bibliotecas Populares respecto de la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico. Considero dicho proyecto un aporte a la cultura de la sociedad dado que con esta medida se avanza sobre la inembargabilidad del patrimonio bibliográfico de las bibliotecas populares, que es un bien de la comunidad para garantizar el derecho a la información y fomentar la lectura.

24

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GARCÍA LARRABURU

**Régimen de subsidios especiales para los menores  
huérfanos de madre por causa de femicidio  
(S.-206/16 y otros)**

Señora presidente:

Considero que, al compás del #NiUnaMenos, se requieren medidas urgentes para erradicar la violencia de género y políticas de Estado que acompañen a las víctimas y a sus familias.

El altísimo índice de femicidios ocurridos entre 2008 y 2015 dejó a más de 2.518 hijos e hijas sin madre. Hablamos de niñas, niños y adolescentes que no sólo padecen el hecho de una madre asesinada por su padre, sino que también sufren un desamparo económico absoluto. Por ello, creo que es fundamental avanzar en la sanción de esta ley, que busca otorgar una reparación económica por parte del Estado a las víctimas colaterales del femicidio.

El Estado está obligado a acompañarlas a través de una asistencia integral que incluya herramientas sociales, psicológicas, políticas y económicas, a fin de ayudarlas a transitar con dignidad sus vidas.

Los atroces casos de femicidio siguen en aumento. Hace apenas unos meses moría una mujer cada treinta horas. Hoy muere una mujer cada dieciocho. Se trata de una realidad concreta, donde las víctimas directas y colaterales continúan en ascenso.

Aquellas hijas e hijos tienen derecho a una vida libre de violencia no sólo con el objeto de reparar el gran daño que sufrieron, sino, también, por la necesidad de vivir en una sociedad más humanitaria.

25

SOLICITADA POR EL SEÑOR  
SENADOR MERA

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías  
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)**

Señora presidente:

El proyecto en cuestión propone un cambio fundamental de paradigma en el marco del proceso penal argentino.

En orden a los principios, derechos y garantías que rodean al proceso penal, no cabe duda de que existe una posición de especial tutela respecto del imputado, pero ello en modo alguno resulta un impedimento para que el Estado reconozca y tutele con mayor amplitud los derechos de la víctima e implemente acciones que le faciliten el acceso a la Justicia en respeto del principio de igualdad, de raigambre constitucional.

Se ha expresado en este sentido: “[...] Las víctimas en general y de delitos en particular, cuentan hoy con distintos niveles de protección y apoyo, pero la realidad

iberoamericana sigue evidenciando obstáculos para que accedan al sistema judicial y obtener de él una respuesta efectiva. [...] Hasta ahora, la participación y las necesidades de las víctimas no son consideradas de manera integral por los sistemas judiciales nacionales. A pesar de las importantes reformas procesales para la tutela de los derechos de las víctimas en el proceso penal, aún está lejos de garantizar un verdadero equilibrio entre las partes, con detrimento de los derechos de las víctimas de delitos y de otras manifestaciones de violencia. La participación en el proceso judicial no puede convertirse en un factor adicional de vulnerabilidad para la víctima”.<sup>1</sup>

La perspectiva a tomar exige que entendamos que el delito no sólo ocasiona un daño a la sociedad toda, sino que afecta, a su vez, a quien resulta víctima del hecho. La legislación debe ser tendiente a no limitar la participación de la víctima en el proceso penal, sino, por el contrario, a evitar la “revictimización” y dotarla de herramientas eficaces para asegurarle la mayor amplitud en la tutela de sus derechos, todo ello en el marco del Estado constitucional social de derecho.

Esta iniciativa viene, en buena hora, a reconocer a la víctima un lugar de participación activa en las distintas etapas del proceso y a tutelar derechos fundamentales tales como la igualdad, el derecho a ser oída, adecuada asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación y demás derechos constituidos en nuestra Constitución nacional y en diversos tratados internacionales que, a partir del año 1994, cuentan con jerarquía constitucional –artículo 75, inciso 22–.

Se trata entonces, esencialmente, de un proyecto de neto carácter tuitivo con miras a lograr condiciones adecuadas tendientes a respetar, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas.

A esos fines, la regulación propuesta establece el alcance del concepto de víctima –capítulo I. Enuncia cuáles son sus derechos –capítulo III– y, como contrapartida, impone deberes concretos a las autoridades.

Sin embargo, la tutela que aquí se encuentra en juego requiere de acciones positivas a desplegar por parte del Estado que se traduzcan en la efectiva realización de los derechos tutelados a efectos de evitar que sean una mera abstracción.

Estas cuestiones se ven reflejadas en el proyecto que, entre otras medidas, dispone la creación del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos –capítulo V– en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con funciones vinculadas con las distintas formas de asistencia a la víctima, y del defensor público de víctimas –capítulo VI–, como el órgano encargado de ejercer la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos

<sup>1</sup> Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Cumbre Judicial Iberoamericana. Año 2012. En: <http://www.cumbrejudicial.org>. (fecha de consulta mayo de 2017)

en procesos penales, en atención a la especial gravedad de los hechos investigados y siempre que la limitación de recursos económicos o situación de vulnerabilidad hicieran necesaria la intervención del Ministerio Público de la Defensa.

Otro avance de importancia es el fortalecimiento del derecho de la víctima a ser oída en el proceso penal. Esta circunstancia se advierte, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho a ser informada y a expresar su opinión durante la ejecución de la pena cuando se sustancie cualquier planteo vinculado con regímenes de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, semidetención o libertad asistida.

Asimismo, el proyecto establece que la víctima tendrá derecho a acceder en forma gratuita al patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos y en su caso para querellar, si por sus circunstancias personales se encontrare imposibilitada de solventarlo. Esta disposición implica una concretización del derecho fundamental de acceso a la Justicia para la víctima del delito, quien muchas veces no cuenta con los recursos necesarios para poder acudir a un profesional del derecho que la represente en el proceso penal.

26

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIACOPPO

**Modificación de la ley 26.485 para incorporar la violencia pública política como un nuevo tipo y modalidad a las ya existentes (S.-4.213/16)**

Señora presidente:

El proyecto S.-4.213/16 de la senadora González incorpora la violencia política a la ley 26.485. Modifica la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, respecto de incorporar la violencia pública política como un nuevo tipo y modalidad a las ya existentes. Ésta es la modificación central. Ampliamente apoyada por ambas comisiones, responde a las iniciativas planteadas en la declaración de la VI Conferencia de Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, realizada en Lima en octubre 2015, tomando como antecedente la ley 243 de 2012, sancionada por Bolivia y promocionada por la Asociación de Alcaldesas y Concejales de Bolivia.

En la Cámara baja, de acuerdo con un estudio de *Directorio Legislativo*, en 1991, año de la sanción de la ley de cupo femenino, había solo 12 diputadas: un 5 % del total. Esa cifra fue creciendo hasta alcanzar un récord de 40 % en 2008-2009; mientras, hoy hay 99 mujeres sobre 257, o sea un 38,5 % de la Cámara. En el Senado, las mujeres llegan al 41,7 % debido a que, para cumplir con el cupo del 30 %, en las listas de sólo dos candidatos, es obligatoria la inclusión de una mujer. Sin embargo, las mujeres presiden menos del 30 % de las comisiones en las dos Cámaras.

En las provincias la situación se replica. En ninguna de las veinticuatro legislaturas del país hay más mujeres que hombres. De acuerdo con un informe de *Directorio Legislativo*, los casos más notorios son los de Santa Fe, Santa Cruz y San Juan, donde las legisladoras no llegan al 25 % del total. En las dos primeras provincias incide el sistema legislativo, dado que Santa Fe tiene Senado, donde sólo una de sus 19 integrantes es mujer, y Santa Cruz cuenta con un sistema mixto, en el que diputados y senadores integran una misma Cámara. En el otro extremo, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego son las tres provincias con mayor presencia femenina en sus legislaturas: más del 45 %.

Esta situación se agrava en los poderes donde no existe una ley de cupo. De los 22 ministros que tiene el gabinete de Mauricio Macri sólo tres son mujeres. La situación se repite en las provincias.

Según un relevamiento de Laura Echezarreta del grupo de mujeres del GEN que lidera Margarita Stolbizer, en los gabinetes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires hay más de 190 ministros y menos de 40 ministras; es decir que las mujeres no llegan al 20 %. Esto se profundiza en las cinco provincias gobernadas por mujeres. Otro dato significativo: en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires hay sólo cuatro con intendentes mujeres.

27

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIACOPPO

**Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio (S.-206/16 y otros)**

Señora presidente:

Este proyecto fue promovido por la asociación civil La Casa del Encuentro para dar respuesta a la importante cantidad de víctimas colaterales de femicidios: hijas e hijos que quedaron sin madres, asesinadas por la violencia sexista.

En nueve años se han registrado 2.919 hijos e hijas que quedaron sin madre, siendo 1.859 de ellos menores de edad. La sanción de esta ley, que permitirá la reparación económica de las víctimas colaterales de femicidio, junto con la sanción de la privación automática de responsabilidad parental que esperamos tratar el miércoles, constituyen el capítulo más importante en las reformas legislativas necesarias para reparar los daños que han sufrido y sufren cotidianamente las víctimas de la violencia de género y, en especial, niños y niñas.

A pedido de la senadora Aguirre se incorporó el inciso c) sobre violencia intrafamiliar o de género, que amplía el universo de beneficiarios/as de la propuesta. La violencia intrafamiliar responde al paradigma anterior a la CEDAW, donde se entendía que las relaciones

de violencia en el seno de la familia era una cuestión de violencia inter pares –integrantes del grupo familiar–. Hoy, la CEDAW ha incorporado otro concepto como el de violencia de género, que explica que la violencia está generada por situaciones de sometimiento históricas y culturales, donde no hay una paridad relacional, sino alguien que ejerce su poder sobre otro. Este tipo de violencia se da especialmente hacia las mujeres, y hacia los niños y las niñas.

Sin embargo, como la ley de violencia doméstica no está derogada y tiene vigencia en muchas jurisdicciones provinciales, cada vez que tratamos este proyecto muchos sectores insisten en que esta ley repare tanto la violencia ejercida contra la mujer como la ejercida por la mujer contra el hombre; violencia intrafamiliar casi inexistente y, menos aún, inducida por el odio de género.

Esta ampliación de sujetos beneficiarios provocó algunas críticas de las diputadas del PRO –Marta Varela, especialmente–. Sin embargo, los casos donde la violencia intrafamiliar no es de género son contados con los dedos de las manos y, como el concepto “intrafamiliar” no remite a la ley 24.417, de violencia familiar, la reglamentación puede acotar este universo a madres y padres que hubieran matado al otro progenitor sin incluir la muerte a mano de otros familiares: por ejemplo, familiares en segundo o tercer grado –tíos–. Ese es el temor de la senadora Varela.

28

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA GIACOPPO

**Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales (C.D.-8/17)**

Señora presidente:

El proyecto sobre creación del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales –C.D.-8/17– es de la diputada Carrizo. Por su parte, se han tenido a la vista los proyectos S.-1.691/16 y S.-132/17, de los senadores Petcoff Naidenoff y Giménez respectivamente.

El proyecto en revisión C.D.-8/17 alcanzó en Diputados un importante consenso, incorporando las sugerencias de todos los bloques integrantes de la Comisión de Familia, en primer término, y de las comisiones de Salud y de Presupuesto en las plenarias que se realizaron en 2016 y 2017.

Este proyecto, promovido por diversos colectivos dedicados a la atención de esta población a la que le debemos tanto –los y las adolescentes egresados de distintos dispositivos de asistencia del sistema de protección integral sin cuidados parentales (hogares, familias de acogida, otros)–, permite a estos y estas jóvenes planificar un futuro con dignidad y autonomía con políticas integrales que abarcan su formación, sus futuras posibilidades laborales y de vivienda, la

planificación de su vida social y educativa, y parámetros sanitarios que les permitan vivir en entornos saludables.

Es importantísimo destacar que, más allá de la voluntad de los adultos, los mismos adolescentes han trabajado en esta propuesta legislativa convirtiendo esta futura ley en una verdadera herramienta para su futuro.

29

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA VERASAY

**Régimen de subsidios especiales para los menores huérfanos de madre por causa de femicidio (S.-206/16 y otros)**

Señora presidente:

Hay que reconocer que la violencia de género y familiar no es una situación aislada que se da en el ámbito privado. Por el contrario, debe tomar dominio público y merece el compromiso responsable del Estado que, además de sancionar y contener, debe desarrollar políticas educativas y de promoción de los derechos que abarquen todos los ámbitos.

Lamentablemente, para muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes el ámbito de la familia llega a ser un ámbito de opresión y de violación de derechos. Las estadísticas son alarmantes. En la Argentina, el año pasado se registraron 290 femicidios: un asesinato cada 30 horas. Fueron 401 los hijos e hijas que se quedaron sin madre: entre ellos, 242 menores de edad. En esa situación, la mayoría de las niñas y niños quedan desamparados, bajo el cuidado de familiares.

También otra de las situaciones que se producen es que los padres resultan detenidos al ser responsables de esas muertes, por lo que muchos niños y niñas terminan en instituciones de menores.

Es imprescindible que los derechos de las niñas y niños sean respetados tal como lo indica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhirió. Una mirada integral al problema debe contemplar desde la prevención hasta la garantía del acceso a la justicia de las víctimas para la protección efectiva de sus derechos.

En este sentido, con esta ley pretendemos otorgar una reparación para que el Estado, ante la vulnerabilidad a la que fueron expuestos los niños, niñas y adolescentes, acompañe con mecanismos institucionales para el acceso a una cobertura de salud integral que cubra sus necesidades físicas y psíquicas.

Se trata de empoderar a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas colaterales de una triste realidad que vivimos como sociedad, de la cual el Estado debe hacerse eco y otorgar todas las herramientas necesarias para su protección.



SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA VARELA

**Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías  
de las Víctimas de Delitos (C.D.-81/16)**

Señora presidente:

Primero que nada, quiero destacar el eficaz trabajo parlamentario que se vino haciendo durante todos estos meses para que podamos estar tratando hoy en el recinto la Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, una ley que forma parte de la política de Estado integral conocida con el nombre de Justicia 2020, que viene impulsando nuestro gobierno y que hace efectivas las cuatro metas claras que plantea. Éstas son: cercanía a la gente, modernidad, independencia y transparencia.

Antes que nada, quiero decir que esta ley logra algo fundamental: reconocer a la víctima. Para reconocerla, primero hay que ponerle nombre y apellido. Por eso, mediante la aprobación de esta ley los expedientes que se tramitan por tribunales dejarán de ser anónimos.

Por otro lado, con esta norma se garantiza que las víctimas y sus familiares cuenten con las medidas de cuidado y asistencia que requieran. Significa proporcionar atención, asesoramiento jurídico gratuito y asistencia psicológica especializada. Resumidamente, no es otra cosa que facilitar a las víctimas el acceso a una Justicia independiente y que puedan hacerlo mediante canales rápidos, modernos y transparentes.

Desde nuestro gobierno estamos convencidos de que la transformación integral de las instituciones debe darse mediante un proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas: el tratamiento de esta norma fue resultado de ello. En él estuvieron implicados referentes del ámbito de la Justicia, profesionales, ONG, expertos, legisladores, jueces, y las víctimas y familiares de víctimas de delitos, que aportaron su visión y trabajo para lograr el texto que hoy estamos votando.

Quisiera dedicar un párrafo aparte a las víctimas y familiares de víctimas de delitos porque son ellos los principales protagonistas del trabajo hecho en torno a esta normativa. Sinceramente, cuando estuve escuchando sus testimonios en el marco de la Comisión de Justicia, de la que soy miembro, no pude dejar de involucrarme con completa responsabilidad y convicción en este tema. No hay mejor manera que legislar conforme a los derechos y a las necesidades que los mismos protagonistas nos transmiten y, por ende, nos hace involucrarnos de una forma superadora. Y los felicito y admiro por poner en acción la resiliencia y la lucha en el ámbito de la Justicia para

contribuir desde su lugar, junto a nosotros, a que las leyes sean cambiadas.

Tengo la convicción de que cuando sancionamos leyes tenemos que preguntarnos cuál es el camino más justo, por lo que no tengo ninguna duda de que con el presente proyecto hemos dado un paso importante para poder garantizar una convivencia no sólo más justa y equitativa, sino que estamos dando herramientas fundamentales para cambiar radicalmente la realidad de quienes deben transitar el penoso camino de pedir justicia.

Por último, quiero cerrar mi alocución dando mi voto positivo a esta ley que implica un enorme avance en lo que para nosotros es una política de Estado, expresando mi deseo de seguir fortaleciendo una Justicia que esté cerca de las personas que más la necesitan, que garantice soluciones rápidas, confiables e imparciales, y que sea responsable por sus actos ante la sociedad.

Si bien las transformaciones no se hacen de manera inmediata, espero que en este recinto podamos seguir orientando el trabajo en materia de justicia hacia esos objetivos en el corto plazo.

SOLICITADA POR LA SEÑORA  
SENADORA VERASAY

**Declaración de zona de desastre y emergencia  
en diversas localidades (S.-1.465/17, S.-2.016/17,  
S.-1.673/17 y S.-1.997/17)**

Señora presidente:

El presente proyecto tiene como objetivo otorgar a la cadena de producción de peras y manzanas de la provincia de Mendoza los mismos beneficios de la ley 27.354, considerados para las provincias del Neuquén y Río Negro.

En primer lugar, compartimos plenamente el diagnóstico plasmado en numerosos estudios y en los fundamentos de la ley citada respecto de la crisis que atraviesa el sector provocada por factores tanto externos como internos.

Particularmente, existe sobreproducción de manzanas a nivel global como consecuencia de la mayor superficie plantada y de los aumentos del rendimiento promedio, directamente relacionado con la aplicación de tecnología de manejo y la contribución del mejoramiento genético. Un ejemplo del cambio producido en los últimos 20 años es el caso de la producción de manzanas en China que, según la FAO, pasó de un poco más de 14 millones de toneladas –lo que representaba el 28 % de la producción mundial en 1995– a casi 40 millones de toneladas en 2013, con el 49 % del total mundial. Este extraordinario cambio por sí solo explica gran parte del problema existente en el sector de man-